¿CÓMO PROTEGER EL PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ?

Las competencias administrativas en materia de protección del patrimonio histórico.

**Encarnación
Jiménez Cornejo.**
*Geógrafa
Asociación
Patrimonio y Desarrollo
Sostenible.*

La conservación y enriquecimiento del patrimonio histórico, según la Constitución, es una función obligatoria que deben asumir los poderes públicos. El Estatuto de Autonomía Andalúz en su artº 12.3 establece que la protección y realce del patrimonio histórico es uno de los objetivos básicos de nuestra Comunidad Autónoma, siendo además una competencia exclusiva, en cumplimiento de esta competencia se aprueba la Ley 1/91 de 3 de julio del Patrimonio Histórico Andalúz.

Según esta ley corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre el patrimonio histórico, sin perjuicio de las competencias correspondientes al Estado o a la Administración local, teniendo nuestra Comunidad que ejecutar la legislación estatal en esta materia.

En cuanto a competencia local son los Ayuntamientos, quienes tienen que dar a conocer el valor cultural de los bienes que integran el patrimonio histórico andalúz que se encuentre en su término municipal. Ellos deben adoptar en caso de emergencia las medidas de cautela precisas para la salvaguarda de esos bienes.

El carácter compartido de la competencia para la protección del patrimonio histórico, lo indica esta ley en su artº 4.2, diciendo que las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma andaluza, colaboraran estrechamente entre sí, en el ejercicio de sus funciones y competencias para la defensa del patrimonio histórico, a través de relaciones recíprocas de plana comunicación, cooperación y asistencia mutua.

¿Qué se entiende por Patrimonio Histórico?

La Ley del Patrimonio Histórico Español considera como integrantes del Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, así como el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico. Aquellos que sean más relevante deberán ser inventariados o declarados de interés cultural (artº 1º).

En nuestra Comunidad Autónoma la ley define al Patrimonio Histórico Andalúz, como aquellos bienes de

la cultura en cualquiera de sus manifestaciones, que se encuentran en Andalucía y revelan un interés artístico, histórico, bibliográfico, científico o técnico para la Comunidad (artº 2. 1).

El Patrimonio Histórico Andalúz se encuentra afectado por varias clasificaciones realizadas por la ley del Patrimonio Andalúz. Todos los bienes integrantes del patrimonio histórico andalúz se agrupan metodológicamente en bienes muebles, bienes inmuebles y actividades o manifestaciones culturales (artº 6.2).

A efectos jurídicos la ley establece tres categorías de bienes inmuebles, basándose en la diferencia de protección que se le asigna a cada categoría. Se crea el Catálogo General del patrimonio Histórico Andalúz, como instrumento para la protección de los bienes que en él se inscriban, sirviendo también para la divulgación y consulta de este patrimonio. Así la inscripción o no inscripción de los bienes inmuebles en dicho Catálogo, determina dos categorías la de los inscritos y la de los no inscritos, éstos últimos quedan fuera de los efectos de esta ley, pues su articulado no establece regulación alguna para ellos.

Entre los bienes inscritos, también existen diferencias en el régimen de protección, así están los inscritos con carácter específico, a los que la Ley les otorga una protección plena, siéndoles de aplicación las normas generales y particulares que se establecen específicamente para ellos, su tutela la tiene atribuida la Consejería de Cultura y Medio Ambiente. La otra categoría es la de los inscritos con carácter genérico, el objetivo de su inscripción es su mera identificación como bien integrante del Patrimonio Histórico Andalúz, su competencia no está atribuida a la Consejería de Cultura, salvo que de forma opcional, ésta quiera exigir la suspensión de las actuaciones o transformaciones de estos bienes inmuebles, durante un tiempo máximo de 30 días hábiles.

Las tres categorías de protección son los bienes inscritos con carácter específico, los bienes inscritos con carácter general y los bienes no inscritos. A los bienes inscritos con carácter específico, la ley los define en función de sus características concretas como Monumentos, Conjuntos Históricos, jardines Históricos, Sitios Históricos, Zonas Arqueológicas o Lugares de Interés Etnológico (artº 26 y 27).

La Ley del Patrimonio cultural protege íntegramente a los bienes de inscripción específica, quedan en una protección más arbitraria los de inscripción genérica y están al margen de esta ley los no inscritos. De esto surge una pregunta evidente.

¿Cómo se protege el Patrimonio genérico y el no inscrito?

La Ley del patrimonio histórico español tiene una mayor extensión jurídica que la del patrimonio histórico

de Andalucía, determinándole una mayor protección a estos bienes al incluirlos en la consideración de patrimonio histórico.

Existen otras leyes sectoriales que contemplan su protección aunque es un aspecto que no tiene un desarrollo más profundo, y las determinaciones que establecen no abundan en dicha protección.

A) Desde el Texto Refundido de la ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, Ley 3/90 de 25 de julio.

La ley del suelo vincula la protección del patrimonio histórico con la clasificación del suelo no urbanizable, en su artº 12 determina que el planeamiento urbanístico puede definir suelo no urbanizable a los terrenos o espacios que quiera preservar del proceso de urbanización, determinándoles una especial protección en razón de sus valores paisajísticos, históricos o culturales.

Con un carácter general esta ley autoriza a que el planeamiento territorial y urbanístico delimite áreas de especial protección, prohibiendo cualquier utilización que transforme el destino, naturaleza o valor específico que se quiere proteger.

También el planeamiento urbanístico establecerá las normas sobre protección del medio ambiente, patrimonio arquitectónico y rehabilitación urbana, a cuyo cumplimiento estarán sujetos los propietarios de terrenos y construcciones.

El planeamiento urbanístico puede ser un instrumento de protección del patrimonio histórico que queda al margen de la Ley del patrimonio, de manera que las competencias de protección las tiene la administración competente en ordenación urbana, tanto a nivel autonómico como a nivel local, pues el desarrollo del planeamiento es una competencia local.

Pueden formularse planes Especiales que desarrollen las previsiones de los Planes Generales o Normas Subsidiarias, para la ordenación y protección de recintos arquitectónicos, históricos y artísticos, sin necesidad de aprobación plena de Plan Parcial.

Para esta ley el concepto de paisaje como objeto de protección incluye una concepción del patrimonio histórico de carácter global, en el artº 89 dice que los aspectos objeto de planeamiento especial para la protección del paisaje son:

- Bellezas naturales en su complejo panorámico o en perspectivas que convinieren al fomento del turismo.
- Predios rústicos, de pintoresca situación, amenidad, singularidad topográfica o recuerdo histórico.
- Edificios aislados que se distinguen por su emplazamiento o belleza arquitectónica parques y jardines destacados por la hermosura, disposición artística, trascendencia histórica o importancia de las especies botánicas que en ellos existan.

- Perímetros edificados que formen un conjunto de valores estéticos o tradicionales.

Finalmente el artº 97 señala que la protección a que el planeamiento se refiera, cuando se trate de conservar o mejorar monumentos, jardines, parques naturales o paisajes requerirá la inclusión de los mismos en Catálogos urbanísticos que se aprobarán de forma simultánea al planeamiento.

B) Desde la legislación existente en materia de protección medioambiental.

En la regulación de la Evaluación de Impacto Ambiental se contempla que el contenido de ésta incluya la estimación de los efectos sobre los elementos que componen el patrimonio histórico.

La Ley 2/89 de 18 de julio, del Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, propone la protección medioambiental vinculada al patrimonio histórico que se encuentra en el ámbito territorial del Parque Natural y en su área de influencia. Esta protección integral es una iniciativa del Consejo de Gobierno, que es el que tiene la capacidad de formular las ayudas técnicas y financieras que posibiliten las mejoras de las actividades tradicionales (patrimonio etnológico). También las precisiones para rehabilitar la vivienda rural y conservar el patrimonio arquitectónico.

A partir de 1987 se aprueban las declaraciones de Parque Natural mediante Decretos en los que sus exposiciones de motivos proponen la protección de los ecosistemas que se encuentran en el ámbito territorial delimitado, ordenando sus recursos de manera que se consiga un equilibrio entre el progreso económico y social de sus pueblos y la conservación del patrimonio natural y cultural.

La protección de estos parques Naturales se desarrolla en los Planes Rectores de uso y Gestión. Entre los objetivos del P.R.U.G. del P.N. de Doñana que es de los más antiguos, 1984, se define la protección y conservación de los recursos culturales y arqueológicos, delimitándose por ello unas áreas histórico-culturales.

El PRUG del P.N. de la Sierra de Grazalema (1988) prohíbe la realización de cualquier construcción, o alteración del paisaje que incida sobre los yacimientos arqueológicos.

La ley del Patrimonio Histórico no es la ley exclusiva del patrimonio cultural y lo que ella protege no es todo nuestro patrimonio.

cos, así como las actuaciones que comporten degradación del patrimonio histórico-cultural de las poblaciones del área. En su programa de Actuación incluye, entre otros, el Plan de Investigación y manejo, que tiene como uno de sus objetivos, que sus programas de investigación favorezcan un mayor conocimiento sobre el medio natural, cultural, histórico, antropológico y socioeconómico del P.N. El manejo de los recursos perseguirá la preservación de los yacimientos arqueológicos, monumentos artísticos y formas urbanísticas tradicionales, por medio de la promoción de inventarios y excavaciones como forma de fomentar el recurso turístico. Igualmente se interesará por el mantenimiento de los cultivos tradicionales de regadío.

Dentro del mismo programa de Actuaciones hay otro Plan, el de Promoción, dirigido a potenciar la artesanía tradicional de los municipios del Parque. Debe tener un Catálogo de Sitios de Interés que incluirá elementos culturales como yacimientos arqueológicos y monumentales, estableciendo medidas de protección y normas de uso.

Otro ejemplo interesante es el PRUG de las Marismas del Odiel (1990) que propone como objetivos de Conservación e Investigación, la protección específica de elementos o hitos de significación paisajística y eco-cultural que singularizan el paraje Natural, así como el conjunto del patrimonio arqueológico, histórico, cultural y arquitectónico del mismo.

De entre los objetivos para la Gestión de los Recursos se propone favorecer e incluso asegurar el sostenimiento de aquellos espacios, prácticas y actividades de singularidad ecocultural dentro del ámbito.

Hemos visto que el patrimonio histórico tiene una concepción muy amplia, que puede ir desde elementos singulares arquitectónicos, arqueológicos, urbanísticos, etc. hasta actividades y prácticas tradicionales, costumbres, artesanía cultivos, etc. todo ello sin necesidad de estar incluido en el Catálogo del Patrimonio Andaluz o declarado BIC, sino por estar arraigado al Patrimonio de una comunidad que vive y se encuentra en el ámbito del Parque, se vincula dicho patrimonio al medio ambiente, dándole una visión integral. En este mismo sentido se habla de un patrimonio con una concepción más nueva y global como es el patrimonio eco-cultural, que la ley del patrimonio histórico no llega a recoger.

Podemos concluir que la ley del Patrimonio Histórico no es la ley exclusiva del patrimonio cultural y que el patrimonio histórico que ella protege no es todo nuestro patrimonio, siendo éste de una mayor extensión. Así la defensa de nuestra cultura debe plantearse con carácter global, a través de los instrumentos legales disponibles para ello, y con la colaboración y cooperación de los diferentes órganos y administraciones, así como con una mayor participación y competencia de los agentes sociales. Aspecto éste muy poco desarrollado en nuestro país en comparación con otros países europeos. ♦